

CORREGIR LA CEGUERA CATÓLICA

Samuel Gregg¹

“Vea, juzgue, actúe”. Ese ha sido el método mediante el cual la doctrina social de la Iglesia ha implorado a los católicos abordar los retos económicos y políticos de nuestra época. Primero y ante todo, el “ver” implica observar con los ojos de Cristo en lugar de hacerlo a través del prisma de nuestra propia ideología. Pero ver inevitablemente implica elecciones acerca de qué vemos, y de la amplitud y profundidad de lo que tomamos en cuenta. En este sentido, lamentablemente, el campo de visión de la doctrina social católica moderna parece ser bastante más limitada de lo que tendemos a percatarnos y por tanto es menos efectiva para ayudar a los católicos y a otros cristianos a atajar muchos temas económicos. Desde los lúgubres prospectos de desempleo en Europa hasta la pobreza en el mundo en vías de desarrollo.

No se trata de revisar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Nunca cambian sus imperativos, tales como la solidaridad, la subsidiariedad, la dignidad de la persona, y el destino universal de los bienes materiales, ya que están cimentados en lo que la revelación y el derecho natural nos dicen sobre lo que la Iglesia llama “desarrollo humano integral”: el completo florecimiento de cada persona y comunidad. La continuada adherencia a estos principios es, sin embargo, perfectamente compatible con expandir el horizonte de las visiones de la doctrina sobre la vida económica. Esto permite hacerla menos dependiente de lo que libremente podríamos etiquetar como un consenso europeo, occi-

dental, de centro-izquierda, así como más atenta a los desarrollos que continúan afectando, tanto positiva como negativamente, el bienestar económico de millones de personas.

Aproximadamente a 5,764 millas de distancia de Roma, en una pila de rocas justo a un costado del litoral de la China continental, yace la región administrativa especial de Hong Kong, una dinámica ciudad de siete millones de personas. Sería difícil encontrar un mejor ejemplo de la transformación económica del este asiático durante los últimos cuarenta años. Desde que los amos de Hong Kong tomaron el control en 1997, en la República Popular se han abstenido relativamente de interferir con los arreglos económicos de la antigua colonia británica.

¿Cómo es que naciones relativamente pequeñas como Singapur, Malasia y Corea del Sur, pero también gigantes como India y China, están funcionando bastante bien en una economía global por demás deprimida desde 2008? ¿Por qué proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la economía de la India crecerá en 6.4 por ciento y la de China en 7.3 por ciento para el 2015, comparado con un pobre crecimiento de 1.8 por ciento para la Unión Europea? ¿Qué ha permitido que estas naciones se deslinden de décadas de estancamiento luego de permanecer bajo la economía planificada (coloquialmente conocida como el “permiso raj”) que existió en India desde su independencia hasta los años noventa? ¿Y qué decir de las masivas hambrunas y la muerte que siguió al esfuerzo de Mao por dar un “Gran Salto Adelante” a través de la colectivización agraria y la industrialización dirigida por el Estado?

Estas naciones no se transformaron aferrándose al análisis asociado con la teoría de la dependencia de los economistas del siglo XX que influyeron sobre muchos teólogos de la liberación con sus argumentos sobre el flujo de los recursos de la “periferia” de los países pobres hacia un “centro” de países ricos, enriqueciendo a los ricos a expensas de los pobres. Central a este argumento fue la insistencia del economista argentino Raúl Prebisch que sostenía que las naciones periféricas estaban en desventaja con relación a los países desarrollados porque, a su entender, los países más pobres encaraban términos desfavorables de intercambio. Se seguía —o así afirmaban los teóricos de la dependencia— que las naciones periféricas debían restringir la inversión extranjera y limitar el comercio con los países desarrollados; esto reduciría su dependencia de las exportaciones de minerales en crudo y productos agrarios, promoviendo así el surgimiento de sectores industriales domésticos.

Muchas naciones en el este asiático eligieron este camino. Hace veintiún años, un reporte del Banco Mundial reconoció que algunas de ellas, aunque en diferentes proporciones y ninguna de forma perfecta, estaban saliendo adelante tras adoptar tasas de intercambio competitivas, abolir los controles de precios, liberalizar gran parte de sus mercados laborales, seguir políticas monetarias y fiscales relativamente prudentes, y, sobre todo, abrirse al comercio internacional y al influjo del capital extranjero. El proceso, que empezó con los “tigres” del sudeste y noreste de Asia conforme se integraron a la economía global durante la década de los sesenta, se aceleró luego de 1980 con la apertura de las economías de China e India. En su libro *Capitalismo con Características Chinas* (2008), Yansheng Huang, asociado al MIT, detalla cómo el crecimiento excepcionalmente rápido experimentado por China en los años ochenta fue conducido por una explosión del emprendimiento privado facilitado por el acceso a la inversión extranjera y por las reformas que promovían una mayor flexibilidad económica.

Ciertamente, no todo es dulzura y liviandad en Asia del este. Aún persisten los recuerdos del severo derrumbe financiero que atravesó la región en 1997. Más amenazante resulta el hecho de que el gran sistema bancario de China sea irremediablemente administrado como una extensión del gobierno. Hasta cierto punto, es casi incestuosa la forma en que los mismos bancos están fuertemente involucrados en apuntalar a miles de empresas propiedad del Estado chino que son poco productivas. Es una receta para cosechar problemas. La corrupción sigue siendo un problema endémico, más notoriamente en China e India, que obtienen poco impresionantes punteos de 96 y 134, respectivamente, en el Índice Haciendo Negocios del 2014, del Banco Mundial. En tanto, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Malasia y Tailandia se ubican entre los veinte mejores puestos.

Sin embargo, no pueden negarse los beneficios generalizados de mayores cuotas de libertad económica en Asia del este. En 2010, el Banco para el Desarrollo de Asia (BDA) reportó que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se incrementó en 6 por ciento cada año en los países en desarrollo de Asia, entre 1990 y 2008. Los cristianos deberían considerar especialmente cómo este crecimiento ha contribuido a reducir la pobreza. El BDA estima que entre 1990 y 2005, aproximadamente 850 millones de personas escaparon de la pobreza absoluta. Esta es una cifra impresionante.

Por supuesto, millones de los habitantes del este Asiático siguen siendo pobres. Aun así, los números recién mencionados represen-

tan una tasa de crecimiento económico asombroso. Contrario a lo expresado por los profetas económicos y teológicos de la teoría de la dependencia, pero también, para ser honestos, por la encíclica *Populorum Progressio*, publicada en 1967 por Pablo VI, la liberalización económica, incluyendo la liberalización del comercio, resultó no ser una carrera hacia la perdición. De hecho, ayudó a facilitar el surgimiento de una gran clase media en India, China y otros lugares. En el caso de China, la nueva clase media ha resultado sorprendentemente receptiva al mensaje del Evangelio.

Alrededor de 1996, Michael Novak escribió que dejamos de reportar una noticia crucial acaecida en el siglo XX: la viabilidad de la muerte del socialismo. Más de unos cuantos católicos, particularmente en los países occidentales y en América Latina, participaron de esa tremenda omisión. Es lamentable que gran parte de la Iglesia católica siga ignorando los avances alcanzados por Asia del este y las lecciones económicas que podemos aprender de ellos. Ciertamente, en *Centesimus Annus* (1991), Juan Pablo II reconoció que era una locura para un país intentar desarrollarse permaneciendo aislado de la economía global. Pero aun este documento relativamente “promercado” no elaboró sobre el punto. En la encíclica social más reciente, *Caritas in Veritate* (2009), Benedicto XVI dedica solamente una línea que alude a los miles de millones (quizás una exageración) que han escapado de la pobreza debido al crecimiento económico. No obstante, no reflexiona en el mismo texto sobre las razones claves para dicho crecimiento.

Un similar descuido es evidente en el trato de la Iglesia católica acerca de las dificultades económicas confrontando a muchas naciones desarrolladas. Una de dichas dificultades son los niveles catastróficos de desempleo que prevalecen en gran parte de Europa Occidental y que fueron tan fuertemente condenados por el papa Francisco durante su visita a Sardinia en 2013. Basta con recoger una copia de *Le Monde*, *La Repubblica* o *The Guardian*, un día cualquiera en Europa, para descubrir cómo la crisis de desempleo en Europa es atribuida a la “mondialización”, “globalizzazione” o “globalization”, y no sólo por parte de la izquierda, sino por el Frente Nacional de Marine Le Pen y otros partidos de extrema derecha. Sin duda, la globalización económica trae junto con sus considerables beneficios, ciertos efectos sociales que suelen ser minimizados por algunos promotores del mercado. Dicho esto, la doctrina social católica está marcada por una renuencia a conceder que las elecciones hechas por los mismos europeos

hayan contribuido a tener altos niveles de desempleo en muchas naciones europeas.

En ninguna parte de las enseñanzas sociales católicas recientes se encuentran referencias al incremento en el desempleo provocado por las cientos de miles de regulaciones, al nivel regional, nacional y de la Unión Europea, diseñadas para “proteger” los empleos de la gente. Un informe del 2011 del Banco Mundial sobre la situación económica en Europa mostró evidencia de todo el continente que sugiere que la persistencia de las regulaciones y de los elevados costos laborales en países como Bélgica, Italia y Francia, ayuda a explicar por qué muchas de estas naciones no logran expandir sus fuerzas de trabajo pese a contar con negocios que son exitosos en otros aspectos.

Por ejemplo, el Código de Trabajo de Francia, con una extensión de 3,400 páginas, obliga legalmente a las compañías con más de 49 empleados a establecer no menos de tres consejos de trabajadores. Si tales empresas deciden que necesitan despedir a algunos integrantes de su planta, están obligadas a presentar un plan de reorganización a los tres consejos. ¿Es de sorprenderse que muchos negocios franceses no contraten más personal?

A Italia no le va mucho mejor. En su libro *El futuro de Europa* (2008), los economistas Alberto Alesina y Francesco Giavazzi observan que el notablemente lento sistema de justicia italiano, de repente se vuelve muy eficiente en casos de despidos a trabajadores. La mayoría de las personas que recién pierden sus empleos son rápidamente reincorporadas a sus puestos. Esto pone en riesgo a los empleadores, y crea desincentivos para contratar personal de inicio.

En muchos países de Europa, los esfuerzos por resolver estos problemas se topan con una gran resistencia. Cuando fungía como primer ministro de Italia, en el 2012, Mario Monti intentó cambiar las leyes que dificultaban enormemente la reducción del personal a aquellos negocios con más de quince empleados de tiempo completo. Algunos trabajadores tenían empleo de por vida, mientras otros sufrían por una constante inseguridad laboral. El plan de Monti era conceder algunas provisiones de indemnización a las personas que eran despedidas por motivos económicos. Bajo una presión intensa de los sindicatos, sin embargo, su propuesta se diluyó. Aunque se mantuvieron las provisiones de indemnización, la nueva ley hacía valer los poderes extensos del organismo judicial para investigar si era justificada la decisión de la compañía

de despedir a un empleado. Esto esencialmente anuló cualquier efecto liberalizador de la nueva ley.

El impacto económico negativo de los sindicatos todopoderosos suele no mencionarse en las enseñanzas sociales católicas. Cualquier lectura cuidadosa de la doctrina social de la Iglesia pronto evidencia que esta institución no concede un completo endoso a cualquier actividad sindical, sea cual sea. Pero rara vez refleja una nota crítica sobre aquella imagen histórica de los sindicatos que se presenta en la doctrina social.

En *Centesimus Annus*, por ejemplo, Juan Pablo II afirmó que los sindicatos jugaron un papel importante en revertir el comunismo en Europa Central y Europa del Este. Eso es obviamente cierto con respecto al Movimiento de Solidaridad de Polonia—el cual siempre fue mucho más que un sindicato. Sin embargo la contribución a la caída del comunismo hecha por estas organizaciones frecuentemente dominadas por la dura izquierda en Inglaterra, Italia y Francia, por nombrar algunos, es, en el mejor de los casos, confusa. En 1983, Arthur Scargill, quien encabezaba el sindicato más poderoso de Gran Bretaña en ese entonces (la Unión Nacional de Mineros), condenó a Solidaridad por ser “una organización antisocialista que desea derribar a un Estado socialista”. La doctrina social de la Iglesia tampoco ha puesto demasiada atención al hecho de que los sindicatos contribuyeron a convertir una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos, Detroit, en un sinónimo de desastre económico.

Yo sospecho que esta aparente incapacidad para evaluar con un ojo más crítico el comportamiento real de algunos sindicatos se debe en parte a la tendencia entre los católicos europeos a ver a estos grupos como un eslabón integral del proyecto en el cual han invertido una considerable credibilidad intelectual: el modelo social de Europa, una especie de “capitalismo coordinado”, tal y como fue descrito por uno de los más prominentes comentaristas de las economías europeas, Barry Eichengreen. Por “coordinación”, Eichengreen quiere decir entre otras cosas, la intervención estatal directa para estimular o frenar el crecimiento económico, extensos Estados de bienestar, subsidios directos a industrias particulares, y más significativamente, la cooperación supervisada por el Estado entre diferentes grupos, especialmente sindicatos y negocios.

Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, y otros políticos católicos de la Europa de la posguerra, simpatizaban con una sincronización vertical de las actividades comunitarias no estatales. Esa visión resonaba, después de todo, con las propuestas

para una reforma económica expresadas por la doctrina social de esa época, específicamente con la encíclica de Pío XI, *Quadragesimo Anno* (1931), que cautelosamente afirmaba que una especie de corporativismo era una respuesta adecuada a la Gran Depresión. Como ideal, el corporativismo tiene hondas raíces en la historia de Europa. Desde el siglo XIX tardío hasta el presente, el término ha sido utilizado principalmente para describir un sistema de organización social en el cual las personas son distribuidas en grupos reconocidos por el gobierno, el cual busca coordinar el “capital” y el “trabajo” de tal forma que se promueva el bien común.

En grados diversos, arreglos corporativistas “duros” fueron implementados en la Italia de Mussolini, la España de Franco, la Alemania de Hitler, el Portugal de Salazar y la Austria de Dollfuss. En ciertos casos, el corporativismo sirvió principalmente para cimentar el control político sobre el régimen. El corporativismo “neo” o “suave” se manifestó en la Europa Occidental luego de la II Guerra Mundial, mediante formaciones institucionales como los consejos de trabajo (cuya membresía es invariablemente dominada por los oficiales sindicales) y los cuales deben ser consultados por la gerencia, de acuerdo a la ley. El neocorporativismo incluía también la determinación, conjuntamente con los trabajadores, de arreglos mediante los cuales los empleados (usualmente oficiales de los sindicatos) eran asignados a puestos en las juntas directivas de las compañías. Algunos países, incluyendo Austria, formalmente comprometieron a las empresas y los sindicatos en la determinación de la política gubernamental. Aun hoy día, la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea mantienen muchos de éstos y otros protocolos neocorporativistas.

Algunos historiadores económicos sostienen que, en la Europa de la postguerra, las estrategias neocorporativistas ayudaron a reducir las tensiones en sociedades fracturadas políticamente—naciones que no solo estaban retrasadas en comparación con los Estados Unidos con respecto a estándares de vida, capacidad industrial, niveles salariales, y acumulación de capital, sino además, como era el caso de Francia e Italia inmediatamente después de la guerra, en riesgo serio de ser absorbidas por el comunismo. Por medio de arreglos neocorporativistas —sigue el argumento—, los gobiernos dirigieron tanto los negocios como los sindicatos hacia la aceptación de las políticas gubernamentales. Los sindicatos se comprometieron a hacer demandas salariales que no excedieran el ritmo del crecimiento económico. Los negocios prometieron

invertir más en actualizaciones tecnológicas de lo que hubieran preferido hacer bajo otras condiciones.

Hay bastante de verdad en esta narrativa. Uno podría agregar que luego de lo que algunos llamaron la guerra civil de Europa, que duró treinta y un años, era comprensible que gran parte de los europeos sintiera una mayor atracción por la seguridad que por la libertad. Desafortunadamente, como comentó el economista ganador del Premio Nobel en el 2006, Edmund Phelps, en su libro recientemente publicado, *El Florecimiento de las Masas*, la Europa contemporánea ahora está pagando un precio social y económico muy elevado por haber seguido las políticas neocorporativistas. Una buena parte de la región ya no es competitiva en el mercado global, tras haber apoyado la jungla de regulaciones y mercados laborales inflexibles que, como notamos antes, contribuyen grandemente a elevadas tasas de desempleo por todo el continente.

Los sindicatos y las asociaciones de empleadores pueden, por ejemplo, negociar todos los salarios que quieran bajo el vigilante ojo de los gobiernos europeos. Pero si la mano de obra es menos cara y los enredos burocráticos son más fáciles de navegar en, digamos, Corea, ¿puede usted realmente culpar a las empresas cuando deciden que es más simple saltarse al intermediador del oficialismo neocorporativista estatal, y construir sus fábricas fuera de Seúl y no en Normandía, y emplear a coreanos en lugar de a normandos?

No es el caso que todos los europeos sean inconscientes de estos problemas. Una de las razones por las cuales Alemania es capaz, por el momento, de soportar la carga de las economías del sur de Europa, se debe a que un canciller socialdemócrata, a principios de este siglo, promovió una liberalización limitada de los mercados laborales de Alemania, y además impuso más restricciones al Estado benefactor y redujo los impuestos a los ingresos y a los negocios. Es muy probable que la Agenda para 2010 (como se conocen estas reformas) le costara el trabajo a Gerhard Schröder, pues los enojados votantes alemanes lo castigaron por interrumpir su plácido, pero insostenible, *estatus quo*. Viendo hacia atrás, empero, los cambios probablemente ayudaron a los negocios alemanes a ser competitivos internacionalmente y a mantener una tasa de desempleo más baja en comparación con otras naciones europeas desde 2009. No obstante, no es tan fácil encontrar a políticos europeos, que sean demócratas y cristianos, argumentando públicamente, indistintamente de lo que opinen en

forma privada, que una significativa liberalización económica es un requisito para reducir el desempleo y restaurar la competitividad.

Debe decirse que los obispos católicos de Europa tampoco han sido especialmente creativos al reaccionar a los problemas económicos de su región. En sus comunicados sobre estos temas, invariablemente hacen llamados para una mayor solidaridad en respuesta a la crisis de que afecta a la región. Es justo. Pero muchos obispos europeos proceden a confundir la solidaridad con la acción estatal y con el corporativismo suave. En un documento sobre la crisis económica europea publicado en 2011, por ejemplo, la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa notó que “el cambio demográfico” (palabras claves que aluden al envejecimiento de la población y a la negativa a la procreación de más hijos por parte de los ciudadanos) y la globalización requerían la reforma de unas políticas sociales. Sin embargo, el texto inmediatamente advertía que no debía permitirse que las reformas “alteraran el tejido de la protección social”.

Tristemente, según ilustra la experiencia alemana, si el cambio ha de ser efectivo, precisamente lo que se necesita es una disrupción, como la que propició Schröder, del funcionamiento de los sistemas benefactores de Europa. En contraste, el documento de los obispos motivaba a los “socios sociales” de la región y a los reguladores para que colaboren en la respuesta al problema del desempleo. Este clásico lenguaje del neocorporativismo indica una reticencia a aceptar que, como Phelps claramente escribe, “Europa no se va a recuperar a los niveles respetables de empleo que tuvo en los años noventa, y mucho menos recuperará su alto índice de prosperidad de principios de la década de los noventa, mientras siga aferrada a la creencia de que la economía corporativista (...) puede alcanzar la estabilidad y armonía que el capitalismo no puede alcanzar”.

La falta de atención a los efectos disfuncionales de las políticas corporativistas y altamente intervencionistas no se limita a los católicos de la Europa Occidental. En América Latina, a 7,315 millas al suroeste de Roma, se encuentra Argentina—al “final de la tierra”, según la descripción que hiciera de ese país su ciudadano más famoso después de Diego Maradona—, un país católico que es prácticamente sinónimo de “fracaso económico”.

“Existen países que son ricos”, observó una vez el peruano Mario Vargas Llosa, “y países que son pobres. Y hay países pobres que están haciéndose ricos. Y luego está Argentina”. En 1900, Argentina se ubicaba entre las diez naciones más ricas del mun-

do en términos de ingresos per cápita. Bendecida por inmensos recursos naturales y grandes entradas de capital extranjero que la ayudaron a desarrollar su infraestructura más rápido que los demás países sudamericanos, este país atrajo a cientos de miles de inmigrantes europeos, incluyendo al joven Mario Bergoglio, venido del Piamonte, Italia. Argentina también disfrutó de estructuras estables de gobernanza. Tomados en conjunto, estos factores le permitieron penetrar los mercados internacionales como un proveedor competitivo de productos agrícolas.

¿Así que, cómo es que Argentina se encuentra en una posición económica bastante diferente en 2014? Hasta los años cuarenta, el crecimiento del producto interno bruto per cápita de la nación sudamericana solo se colocaba unos puntos detrás del de Australia. Todo cambió, sin embargo, una vez la estructura institucional del país se empezó a corroer desde adentro, especialmente después de que el coronel Juan Perón ascendió al poder. Aun antes de convertirse en presidente, en 1946, Perón empleó la retórica populista que luego asociaríamos con Hugo Chávez. Pero en términos de la política económica, como ilustra Mauricio Rojas en *Las tristezas de Carmencita* (en inglés, *The Sorrows of Carmencita*, 2002), un instructivo estudio del auge y la caída económica de Argentina, Perón siguió una agenda de duro corporativismo que contribuyó a los problemas internos que hoy hacen daño a su economía.

Desde el principio, el régimen de Perón controló intensamente la sociedad civil argentina de arriba a abajo, una estrategia que, en su momento, se apoyó en las referencias que Perón hacía de *Quadragesimo Anno*; otro tema es que éstas alusiones fueran justificadas o no. Mediante una combinación de palo (castigos) y zanahorias (premios), los sindicatos fueron el primer grupo en ser comprometido por el sistema. Estas primeras incursiones hacia “la comunidad organizada”, como la llamó Perón en un discurso de 1949, se acompañaron de crecientes ajustes a las iniciativas influidas por Raúl Prebisch, anteriormente mencionado, que incluyeron la industrialización intensamente dirigida por el Estado, programas de sustitución de importaciones, y esfuerzos por minimizar la inversión extranjera, principalmente a través de la nacionalización de bancos e infraestructura que había pertenecido a los ingleses.

Ya para 1949, Argentina había adoptado una constitución nueva con inclinaciones corporativistas y había eliminado la autonomía de la Corte Suprema. Perón entonces procedió a empujar sus políticas aún más profundamente en la economía. Su gobierno

obligó a empresas, universidades, periodistas y aun a estudiantes de colegio a ser parte de asociaciones que eran controladas por el Estado. El Estado peronista y sus clientes sindicales también asumieron un control más directo sobre el seguro social. Se duplicó el número de empleados públicos, en paralelo con las demás políticas, lo cual, subraya Rojas, “desencadenó un desarrollo que conduciría a uno de los problemas más severos para Argentina, concretamente una creciente corrupción y un concurso por acceder a privilegios”. No sorprende el hecho de que mucha de la actividad empresarial dejó de ser dirigida por la demanda del consumidor. En lugar de eso, las empresas volcaron su mirada hacia la obtención de favores políticos.

Luego de que implosionara la economía del país y escalaran las tensiones sociales, los militares de Argentina a la larga tomaron medidas contra Perón, con el respaldo de la Iglesia, mandándolo al exilio en 1955. En muchos sentidos, sin embargo, Argentina nunca se libró del peronismo. Su economía sigue estando irremediablemente sobrerregulada. En el Índice de Libertad Económica del 2014, Argentina obtuvo el puesto 166, de un total de 178 países. En los años noventa, el congreso de Argentina rechazó esfuerzos por desregular los mercados laborales sin pensarlo dos veces.

A pesar de varios esfuerzos de reforma, las costumbres corporativistas se arraigaron profundamente en la cultura económica del país, como ha demostrado el economista constitucional argentino Juan Vicente Sola. Esto crea incentivos, observa Sola, para la corrupción, que incluye una búsqueda de rentas desenfrenada por las empresas y los sindicatos. Durante los años noventa, el programa de privatizaciones de Argentina fue fatalmente contaminado por escándalos de corrupción interminables. En todo caso, la situación ha empeorado desde entonces. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aun la agencia de estadísticas oficiales del país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ha estado rutinariamente alterando los libros durante años para exagerar sus tasas de crecimiento y disfrazar una descontrolada inflación.

Tampoco existe evidencia de un recato en los discursos populistas. Dichas expresiones han proliferado bajo las presidencias del fallecido Néstor Kirchner y su viuda, Cristina. Por algo era que el Cardenal Jorge Bergoglio consistentemente denunciaba la demagogia empleada por los políticos argentinos. La moraleja de la historia de la “decadencia económica” de Argentina, como la llama Sola, es clara. La adherencia en el largo plazo a las políticas corporativistas e intervencionistas legitimadas por una oratoria populista incendiaria,

seriamente debilita las capacidades para crear riqueza de un país, y por ende diezma su habilidad para reducir la pobreza. Al contrario, estas medidas incentivan una predecible mezcla de arreglos mercantilistas que benefician a los que tienen amigos políticos o que son los suficientemente inescrupulosos como para comprar favores.

Los “perdedores” en estos sistemas son las personas que el papa Francisco describe como las periferias sociales: los pobres, quienes tienen bajos niveles de escolaridad, los desempleados, y aquellos sin conexiones políticas. Son los mismos a quienes los Chávez, los Kirchner, los Correas y los Morales de América Latina instan a echar la culpa de su malestar a cualquiera: extranjeros, ricos, “neoliberales”, o al “imperialismo de las finanzas internacionales”; a cualquiera, excepto a sus propios amos políticos y a veces, hay que decirlo, a sus propias escogencias políticas. Las elecciones tienen consecuencias, después de todo.

Nuevamente, sin embargo, debemos preguntarnos: ¿las enseñanzas sociales católicas han tomado conciencia de lo que las décadas de flojera en Argentina y en otros países, conducente a la decrepitud económica, nos dicen sobre la riqueza y la pobreza? ¿Por qué, podrían preguntar los católicos, los vecinos próximos a Argentina, Uruguay y Chile, se ubican en la punta opuesta del espectro de corrupción, según Transparencia Internacional? ¿Cómo es, podrían seguir indagando, que estos dos países latinoamericanos, mayoritariamente católicos, han desarrollado sus economías (incluso a pesar de soportar dictaduras militares, insurgencias izquierdistas y abusos generalizados a los derechos humanos) al punto de que en 2013 el Banco Mundial los reclasificó por primera vez como países de ingresos superiores a la media?

Regresando a Europa, compare las economías más influenciadas por el corporativismo con las economías menos corporativistas, y note cómo las primeras rinden relativamente peor con relación a su productividad, empleo e innovación, como enfatiza Phelps en *Mass Flourishing*. ¿Podría ser el caso de que los esfuerzos por alcanzar una seguridad económica perpetua y el empleo completo mediante la coordinación central, realmente produce el estancamiento y la inseguridad de altas tasas de desempleo? Viendo las cosas desde una perspectiva más global, y arriesgándome a irritar a los vigilantes de la corrección política, podemos tomar los datos que aportan el Índice de Libertad Económica de 2014 y el FMI, respectivamente, para preguntarnos: ¿por qué cuatro de las cinco naciones más libres y cinco de los diez países más ricos en términos de PIB per cápita son antiguas colonias británicas?

No obstante el hecho de que el papa Francisco provenga de una parte del mundo que ha experimentado más agitación económica de la que le correspondería, no es su responsabilidad dar respuestas detalladas a estas preguntas. Aunque *Evangelii Gaudium* ilustró que él tiene sus propias opiniones, el papa argentino también ha dejado claro que los detalles prudenciales de las políticas económicas deben ser analizados principalmente por personas laicas. Si, sin embargo, el primer papa no europeo en mil trescientos años representa una oportunidad para expandir los horizontes de la Iglesia, entonces parte de esta visión expandida podría significar que más católicos exploren las evidencias que pudieran ejercer alguna influencia sobre la doctrina social de la Iglesia pero que por el momento no calan. A la luz de estas evidencias, la doctrina social católica podría distanciarse aún más de juicios prudenciales obsoletos, condicionados por la historia, como por ejemplo con relación a los efectos del comercio libre. De la misma forma, la Iglesia no tiene nada doctrinalmente invertido en el paradigma sobre el trabajo y el capital que nos legó el siglo XIX, una construcción intelectual que no sólo resulta inadecuada para comprender la economía globalizada del presente sino que además lucha por explicar el papel crucial que juegan las correctas decisiones en valores, las normas sociales particulares y ciertas instituciones en producir lo que *Rerum Novarum* denominó la *divitias civitatum*, la riqueza de las naciones.

Nada de esto implica comprometer las demandas de la justicia. Permitiría, empero, que la “vista” de las enseñanzas sociales católicas tomara una consideración más amplia de lo empírico, sin ser empiristas, y ver lo que realmente funciona, sin caer en un pragmatismo, y remover algunas de las anteojeras conceptuales que han inhibido la visión de muchos católicos sobre cómo se pueden transformar las economías mundiales en terrenos para el florecimiento humano. No exige menos el bienestar de los pobres.

Notas

- 1 Este artículo se publicó originalmente en inglés en la revista *First Things* en agosto de 2014, se tradujo al español y se publica aquí con los permisos correspondientes. Título original: “Correcting Catholic Blindness: What Catholic Social Teaching Doesn’t Know”. Traducción de Carroll Rios de Rodríguez.